

JUNIO 2017

El rol del empresariado argentino en el mundo*

Por Francisco de Santibañes

Una de las características que nos diferencian a los argentinos de los países avanzados y de nuestros principales vecinos es la debilidad de las empresas nacionales. En los últimos años las firmas argentinas no sólo han sido incapaces de promover la inserción económica de la Argentina en el mundo, sino que tampoco han generado los trabajos de calidad que se necesitan para integrar a los vastos sectores de la sociedad que se encuentran marginados. En este trabajo analizaré algunas de las causas y de las posibles soluciones de este fenómeno.

¿Por qué necesitamos contar con empresas nacionales? En primer lugar porque sus intereses suelen coincidir con los del país en el largo plazo. Efectivamente, si al país le va mal, difícilmente a los empresarios argentinos les pueda ir mejor. Las empresas extranjeras, por otra parte, suelen tener una visión más de corto plazo que les permite, en caso de que las condiciones no les sean favorables o decidan priorizar otros mercados, disminuir rápidamente su exposición local sin que por ello peligre su existencia.

A esto debemos sumarle el hecho de que las firmas argentinas son controladas por empresarios que mantienen lazos afectivos y sociales con el país. Esto hace que su nivel de compromiso con la Argentina sea superior al que puede tener el gerente extranjero de una multinacional. En el mejor de los casos, estos empresarios deberían querer formar parte, como ocurre en la mayoría de las naciones desarrolladas, de una clase dirigente que tenga como principal objetivo proteger los intereses del país a largo plazo (1).

Adicionalmente, la expansión internacional de las empresas argentinas traería consigo una serie de beneficios. Entre estos podemos mencionar la entrada de divisas por las operaciones que realizan en el exterior, el establecimiento en su casa matriz de los eslabones más redituables de la cadena de producción —marketing, investigación y desarrollo, etcétera—, y el incremento en el poder blando que implica el poder mostrar un sector privado altamente competitivo. En países que cuentan con mercados relativamente pequeños, como es el caso de la Argentina, la internacionalización de sus empresas también les permite a estas alcanzar un tamaño suficientemente grande para realizar las inversiones que necesitan para acercarse a la frontera tecnológica y formar parte de las cadenas globales.

De hecho, la experiencia internacional nos muestra que el empresariado local jugó un rol fundamental al impulsar el crecimiento de aquellos países que lograron dejar el subdesarrollo detrás —Corea del Sur, Taiwán y Singapur, entre otros— o dieron pasos importantes en esta dirección —Perú, Chile, etcétera (2).

* Este artículo fue presentado el 29 de junio de 2017 en la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Inserción de la Argentina en el mundo.

Un repaso por la situación actual nos muestra que estamos muy lejos de contar con empresas capaces de incrementar su presencia en el exterior. Repasemos algunas cifras.

Según la encuesta de grandes empresas del INDEC, tan sólo 179 de las primeras 500 compañías que operan en el país son de capital nacional, lo cual marca una brusca disminución respecto a 1993, ya que en ese año 281 firmas formaban parte del panel. Una caída similar se observa en la facturación de estas empresas, ya que las firmas argentinas pasaron de representar un 40 % del total en 1993 a tan sólo un 20 % en el 2011 (3).

Este panorama contrasta con lo que viene sucediendo en la mayor parte de América Latina, región en donde observamos un empresariado nacional cada vez más activo. En la lista de las 2000 mayores empresas que cotizan en bolsa, encontramos 24 firmas brasileñas, 13 mexicanas, 8 chilenas, 5 colombianas y tan solo 3 argentinas: YPF, Ternium y Tenaris (4). Por otro lado, en el ranking de las 100 principales multilaterales, figuran 33 empresas brasileñas, 26 mexicanas, 16 chilenas, 9 colombianas y tan solo 5 argentinas: Tenaris, Ternium, Arcor, Bagó e Impsa (5).

¿Por qué?

Debemos preguntarnos, entonces, cuáles son las razones que explican la debilidad de nuestras firmas. Un primer motivo, seguramente, es la falta de entendimiento que existe en nuestra sociedad sobre el importante rol que juegan las empresas en las economías modernas. Repasemos algunas ideas que pueden servirnos para comprender esto.

El debate intelectual que tuvo lugar durante más de un siglo entre los defensores del capitalismo y sus críticos, principalmente los marxistas, nos brinda algunas claves. El marxismo sostiene que la misma lógica del sistema capitalista lleva a que los capitalistas exploten a sus trabajadores mediante la expropiación de la plusvalía. La solución a este problema es una revolución proletaria que ponga fin a la propiedad privada y a las clases sociales que esta genera. Una vez logrado esto, la planificación colec-

tiva debería ocuparse tanto de la producción como de la distribución de los bienes.

El economista austriaco Friedrich Hayek basó parte de su crítica al marxismo en lo que denominó "el problema del cálculo económico". Según Hayek, a cualquier individuo u organización centralizada le resultaría imposible recolectar y analizar la cantidad de información que resulta necesaria para planificar, de manera eficiente, una economía moderna. Efectivamente, la producción de los insumos que son necesarios para elaborar cualquier producto depende de las decisiones que toman miles de productores, quienes se basan, para ello, en las variaciones que tienen lugar en los precios de la economía. Pero este proceso de colaboración —que es autorregulado, espontáneo y altamente eficiente— sólo puede darse en el libre mercado, ya que son las empresas las que están capacitadas para hacer un uso eficiente de los recursos (6). Por otro lado, el libre mercado y la competencia que este genera también estimulan el tipo de innovaciones que mejoran la calidad de vida de los individuos. Esto, en parte, explica por qué los grandes cambios tecnológicos siguen ocurriendo en países capitalistas como Estados Unidos.

Otra de las críticas que se le han hecho al planeamiento centralizado, y que nos servirá para comprender el rol que debe jugar el Estado en las economías modernas, proviene de la escuela de elites. Basándose en el trabajo del sociólogo Robert Michels, esta teoría sostiene que las sociedades tienden a ser gobernadas por elites que buscan beneficiarse a sí mismas, incluso cuando tienen lugar revoluciones similares a las que propone el marxismo. Michels denominó este fenómeno "la ley de hierro de las oligarquías" (7). Si aceptamos esta lógica, resultaría utópico pensar que unos pocos funcionarios todopoderosos podrían coordinar la producción de una economía de manera desinteresada. Sus decisiones, como las de cualquier miembro de la elite, también estarían influenciadas por sus intereses personales.

Las reflexiones de Michels y Hayek ponen en duda la capacidad que los funcionarios tienen

para administrar una economía moderna de manera centralizada y para hacerlo de manera desinteresada. En cierto sentido, sus reflexiones resultan incluso más útiles para comprender el escenario actual que el que les tocó vivir a ellos. La mayor complejidad que han alcanzado las economías —debido al surgimiento de nuevas tecnologías y al crecimiento del comercio internacional— y las administraciones públicas —cada vez más grandes y difíciles de coordinar— probablemente hayan transformado el planeamiento central en una tarea aún más difícil. Las empresas, por lo tanto, siguen siendo las organizaciones que están mejor capacitadas para innovar y generar riqueza.

Pero para que esto ocurra, el empresariado tendrá que estar dispuestos a tomar riesgos y competir (8). Deberá, en definitiva, asumir el "riesgo empresario". Si, por el contrario, sus miembros enfrentan incentivos que promueven el comportamiento rentístico, la formación de monopolios o la mera especulación, gran parte de ellos no sólo adoptarán estas prácticas sino que también intentarán cooptar al Estado para que este les brinde oportunidades, privando así a la sociedad de los beneficios que solamente el capitalismo moderno puede proveerle. Es por este motivo que, como sociedad, debemos crear un marco institucional y social que estimule la destrucción creativa que tiene lugar, en palabras del economista Joseph Schumpeter, cuando los emprendedores reemplazan con sus innovaciones a los viejos modelos de negocio (9).

Podemos nombrar al menos dos barreras que dificultan el comportamiento schumpeteriano: la falta de competencia y el favoritismo que los gobernantes suelen mostrar por algunos empresarios. Este accionar estimula el comportamiento rentístico de los empresarios y, al quitarle recursos a las firmas eficientes para dárselos a las menos eficientes, disminuye el bienestar de toda la sociedad.

Existen numerosos mecanismos a través de los cuales este tipo de comportamiento puede darse. Los gobernantes pueden brindarles a sus amigos empresarios el monopolio de ciertos mercados, facilitarles solamente a ellos el acceso a bienes importados, ofrecerles líneas de crédito subsidiadas o asig-

narles contratos con el Estado (10). Como señala Andrés López en su excelente estudio sobre la evolución del empresariado argentino, nuestro país no es ni ha sido una excepción a la regla, ya que si bien en ciertos períodos de nuestra historia existieron incentivos que estimularon el surgimiento de empresarios que generaron valor, en otros momentos primó la búsqueda de rentas mediante comportamientos poco productivos.

Cuando uno examina el desempeño macroeconómico e institucional de la Argentina en el largo plazo, resulta claro que habría sido muy raro encontrar desempeños empresarios innovadores y dinámicos generalizados y sostenidos en el tiempo. Si la inversión y el cambio tecnológico son afectados negativamente por la incertidumbre, la volatilidad macroeconómica y el cambio en las reglas de juego —elementos que inducen más bien conductas cortoplacistas y una fuerte preferencia por la flexibilidad en las decisiones empresarias—, el caso argentino nos ofrece una confirmación muy evidente de esa hipótesis general (11).

Las acciones que llevaron adelante las administraciones Kirchner durante sus mandatos no hicieron más que profundizar esta última tendencia. Existen por lo menos tres fenómenos que marcaron este proceso: el incremento desmedido del gasto estatal y de los impuestos necesarios para financiarlo, el progresivo debilitamiento de nuestras instituciones y un creciente proteccionismo comercial. Analicemos cada uno de ellos. El mayor gasto público se ve reflejado en el tamaño del Estado consolidado (que resulta de sumar el gasto primario nacional, provincial y municipal), que pasó de representar un 26,5 % del PBI en el período 2000-2006 a un 42,5 % en el 2012 (12). Este aumento siguió una lógica que tuvo más que ver con la ampliación de las redes clientelares que con mejoras en áreas claves para nuestro desarrollo, como la infraestructura y la calidad educativa. De hecho, los principales factores que explican el incremento han sido las transferencias corrientes al sector privado —rubro que incluye subsidios—, con un 25 %, el gasto en

seguridad social, con un 23 %, y el gasto en personal, con un 19 %. Por otro lado, las inversiones tan sólo explican un 13 % (13).

El aumento del gasto fue acompañado por un incremento en la presión impositiva, que pasó de representar el 19% del PBI en el 2000 —sumando nación y provincias—, al 32% en el 2015. Hoy el ingreso general del Gobierno argentino supera al de los Estados Unidos, Japón y al promedio de América Latina (14). Como era de esperar, gran parte del nuevo costo impositivo lo han tenido que asumir las empresas argentinas. Según datos del Banco Mundial, en el 2013 la Argentina se encontraba en la posición 147 de 148 países en términos del porcentaje de las ganancias que una empresa mediana paga en impuestos (un increíble 107.8 %, cuando el promedio en América Latina es del 47 %) (15).

Además de volvernos menos competitivos, los impuestos y las regulaciones terminaron consolidando un enorme sector informal. Este fenómeno representa una seria amenaza para el desarrollo de nuestro país, ya que la informalidad no solamente deteriora la calidad del trabajo —el 34 % de los empleados no están registrados—, sino que también le resta productividad a toda economía. Efectivamente, mientras las empresas que cumplen con la ley deben financiar por sí solas a todo el Estado, los empresarios informales se ven imposibilitados de crecer porque no tienen acceso al sistema financiero y al mercado internacional. Este es un modelo en el que pierden los mejores.

El Gobierno de los Kirchner no solo fue incapaz de combatir de manera eficiente la informalidad, sino que en algunos casos la alentó. Esto es lo que sucede con los más de 30.000 puestos ilegales que forman parte de La Salada, el principal mercado negro de América Latina (16). En vez de propiciar su eliminación, el Estado incorporó esta organización a las misiones comerciales que realiza en el exterior. De esta manera, convalidó la violación de los derechos de propiedad, el contrabando y la evasión fiscal.

Otra de las características que ha tenido lugar en los últimos años ha sido el intento del Ejecutivo por debilitar algunas de las instituciones —como

es el caso del sistema judicial, el Banco Central y el Congreso Nacional— que deberían haber controlado sus acciones más arbitrarias. De haber cumplido con sus funciones, estas instituciones podrían haber generado un marco propicio para realizar el tipo de inversiones que hubiesen posibilitado el crecimiento de las empresas y de la economía argentina en general.

Un primer problema consiste en la incertidumbre que causó la violación de contratos, la creciente regulación de los mercados y el debilitamiento de la Justicia, ya que esto desalentó fuertemente las inversiones a largo plazo. Si existe la posibilidad de que el gobierno expropie una empresa, impida la distribución de dividendos o perjudique a un empresario para favorecer a otro más cercano, las inversiones productivas se volverán más riesgosas y menos habituales. Para realizar grandes inversiones las firmas también necesitan contar con financiamiento. Y mientras que en las economías más productivas el financiamiento suele obtenerse en los mercados de capitales o a través de las instituciones financieras, en nuestro país las empresas han tenido que recurrir a fuentes de financiamiento más costosas o descartar la posibilidad de llevar adelante nuevos proyectos debido a la falta de crédito o capitales.

La debilidad de nuestro sistema financiero se ve reflejada en el hecho de que este representa tan sólo el 17 % del PBI nacional, cuando en Brasil y Chile es el 42 % y el 76 %, respectivamente. Al estar tan poco capitalizados, los bancos argentinos no pueden brindar los préstamos que necesita el sector privado. Por otro lado, mientras que en los 60 unas 600 empresas cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires, hoy tan sólo lo hacen alrededor de 100. Asimismo, el mercado de valores argentino se caracteriza por su poca liquidez, como lo muestra el hecho de que tan solo diez compañías concentran aproximadamente el 90 % de su capitalización total.

La reciente modificación de la ley de capitales no hizo más que agravar la situación. La Comisión Nacional de Valores (CNV) ahora está habilitada para intervenir y controlar por 180 días

los órganos de decisión de aquellas firmas que cotizan en bolsa, y también está facultada para suspender la actividad de agentes y mercados sin intimación previa. El daño a la seguridad jurídica que estas modificaciones causaron terminó disminuyendo aún más los pocos incentivos que las empresas argentinas tenían para financiarse a través del mercado de capitales.

Por último, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner también le quitaron competitividad a nuestras empresas al adoptar una política comercial que no sólo nos ha impedido formar parte de las cadenas de valor globales, sino que, debido a la menor competencia, también le ha restado calidad a los productos y a los servicios a los que tienen acceso nuestras empresas y consumidores. Aproximadamente el 80% de lo que importa la Argentina es utilizado para –de una manera u otra– producir localmente. Esto significa que si no podemos importar en condiciones similares a la de nuestros competidores, no podremos ser competitivos internacionalmente.

Teniendo en cuenta el panorama que hemos descrito hasta aquí, no debe extrañarnos que la Argentina no cuente con un empresariado dinámico y competitivo.

¿Qué hacer?

Para revertir la situación en la que se encuentra el sector privado en la Argentina debemos implementar una serie de reformas que faciliten el surgimiento de un empresariado más dinámico y moderno. Aquí tan sólo mencionaremos algunos de ellos brevemente y nos detendremos a analizar, en mayor detalle, el sistema impositivo argentino.

En términos de lo que puede hacer el Gobierno de Cambiemos, es de esperar que las autoridades no vean a las empresas como rivales sino como socias estratégicas. Algunas de las medidas que aún quedan pendientes consisten en eliminar las barreras que han impedido su integración económica con el mundo y el establecimiento, junto con la sociedad civil, de un marco institucional que estimule nuevamente las prácticas productivas. En este sentido, la existencia de un sistema judicial eficaz e

independiente resultará indispensable para asegurar el cumplimiento de los contratos y proteger los derechos de propiedad.

Como ya hemos mencionado, también habrá que controlar el gasto estatal. Esto no sólo permitirá disminuir los impuestos sino que también ayudará a poner un freno a la emisión monetaria y a la inflación. Si esto último no ocurre, difícilmente podremos desarrollar el sistema financiero y los mercados de capitales que nuestros emprendedores necesitan para invertir y hacer crecer a sus empresas. Una menor regulación de los mercados nos permitirá asimismo disminuir los niveles de incertidumbre que predominan en la economía local. Dejar de controlar precios y luchar contra la inflación son dos medidas concretas que el Gobierno ha implementado para beneficio de toda la economía.

Pero más allá de la necesidad de brindar mayor previsibilidad a los actores económicos, existe otro tipo de tareas que el Estado puede realizar para facilitar el surgimiento de una economía más moderna. No debemos olvidarnos, por ejemplo, que los monopolios y los oligopolios dificultan la libre competencia y disminuyen la productividad de la economía. Un paso concreto para combatirlos consistiría en establecer el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que, si bien fue creado por ley en 1999, aún no se encuentra en funcionamiento. Esto le quitaría el control de los monopolios a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que, al ser un organismo que depende del Ministerio de Economía, es susceptible de recibir presiones políticas.

La política comercial también será de suma importancia a la hora de incrementar la competitividad de nuestras empresas. Una estrategia que tenga como objetivo firmar tratados de libre comercio con otras naciones, nos permitirá integrarnos a las cadenas de valor que han surgido recientemente y fomentará tanto la competencia interna como la incorporación de nuevas tecnologías. Por último, el Estado deberá implementar políticas que busquen mejorar la calidad de la infraestructura y de la educación en la Argentina.

Si bien hasta ahora hemos mencionado el tipo de políticas que beneficiarían al empresariado argentino en su conjunto, es necesario distinguir entre las realidades que enfrentan las empresas de mayor y menor tamaño. En el primero de los casos, y debido a las razones que hemos dado al principio de este capítulo, la Argentina debe seguir el ejemplo de nuestros vecinos e impulsar el surgimiento de multinacionales. ¿Pero, aparte de las medidas que ya hemos descrito, qué puede hacer un país como el nuestro para estimular el surgimiento de multinacionales?

Una medida concreta consistiría en crear un consejo de competitividad. Una institución como esta les permitiría a los representantes del empresariado argentino mantener un diálogo permanente y constructivo con los funcionarios. Ayudaría, por ejemplo, a que ambas partes identifiquen los problemas de competitividad que enfrenta el sector privado para luego trabajar de manera conjunta en su solución. Este intercambio de información serviría para reducir los niveles de incertidumbre que existen respecto a las medidas que podría adoptar el gobierno y a eliminar algunos de los prejuicios que existen entre los miembros del sector público y del sector privado.

Pero para que un proceso como este tenga éxito será necesario que se cumplan ciertas condiciones. Resultará clave que los encuentros del consejo tengan un alto grado de institucionalidad para asegurarse que estos se realicen con cierta frecuencia. También será fundamental contar con un equipo técnico capacitado para llevar adelante las tareas que le encomiende el consejo. Finalmente, habrá que asegurarse un nivel de representación adecuada tanto por parte del gobierno como del empresariado. Un ejemplo exitoso en este sentido, y que debería ser estudiado, es el de la Comisión Nacional de Competitividad que estableció el Presidente colombiano Álvaro Uribe en el 2006 y que, dado su éxito, continúa hasta el día de hoy con Juan Manuel Santos.

En cuanto a las pequeñas empresas, se podría implementar medidas que, centrándose en este sector, busquen eliminar las enormes trabas buro-

cráticas e impositivas que enfrentan las pymes argentinas. Se podría abolir o simplificar el sinnúmero de normas con las que deben lidiar cotidianamente nuestros emprendedores. Un sistema de ventanilla única permitiría concentrar en un solo lugar todos los trámites. Otra posible reforma consiste en mejorar la calidad de los funcionarios públicos con los que tratan, lo cual requerirá medir su eficiencia y ofrecer cursos de formación.

También debemos considerar la posibilidad de proveer créditos subsidiados o beneficios de tipo impositivo a aquellos empresarios que quieran llevar adelante emprendimientos en sectores no tradicionales. En efecto, ser el primer jugador en actividades que no han sido explotadas previamente representa una serie de costos que sólo deben pagar los primeros inversores. Por otra parte, los beneficios sociales que genera descubrir un sector en donde el país tiene ventajas comparativas son muy superiores a los beneficios que recibirá el empresario que dio ese primer paso. Este tipo de comportamiento debería, por lo tanto, ser estimulado.

Sin embargo, la experiencia argentina indica que estos beneficios tienden a extenderse demasiado en el tiempo y que pueden ser utilizados de manera irregular. El Estado debe por lo tanto demandar contrapartidas a las empresas que los reciben (incluyendo montos mínimos de inversiones e incrementos en su productividad) e imponer una fecha en la que estos subsidios, de no ser expresamente renovados, deberían caducar automáticamente.

Habría que poner especial énfasis en facilitar el trabajo de aquellos emprendedores que, debido a su situación social, deben desarrollar actividades de manera informal. Efectivamente, su voluntad por crear nuevos emprendimientos y empleos se ve limitada debido a su falta de acceso al sistema financiero y judicial (17). En este aspecto, podría proveérseles títulos de propiedad sobre sus viviendas, talleres y medios de producción, brindándoles asimismo mayor seguridad y acceso al crédito. Los programas que fomentan los microcréditos, en la medida que además de

dinero brinden capacitación, podrían en este sentido transformarse en una herramienta útil.

Será necesario asimismo simplificar el marco regulatorio para crear nuevas empresas. Para tener una idea de los problemas que enfrentan los emprendedores argentinos podemos mencionar que, según Banco Mundial, en nuestro país se tarda aproximadamente días en abrir un nuevo negocio, mientras que en Chile y en México este proceso lleva tan solo 5 y 6 días, respectivamente (18).

Si bien el Gobierno Nacional propuso una ley de emprendedurismo que luego fue aprobada por el Congreso, aún queda pendiente trabajar en al menos dos puntos. En primer lugar, si bien varias de las medidas que promueve la nueva ley son sumamente positivas, aún hoy resulta difícil aplicarlas. Por ejemplo, para que los emprendedores puedan inscribir una sociedad o abrir una cuenta bancaria en pocos días, además de la nueva normativa, el Estado necesita contar con las capacidades que lo hagan posible. Quedan pendientes entonces llevar adelante también reformas de tipo técnico y burocrático – más tediosas y difíciles, pero indispensables.

Por otro lado, muchas veces las nuevas firmas no emergen debido a lo difícil que luego resultará venderlas o ampliar su capital. Por tomar un caso, al no tener un mercado de capitales que permita realizar ofertas públicas de acciones, los emprendedores enfrentan serias dificultades para mantener el control de sus emprendimientos. Esto sucede porque no les pueden brindar a sus socios una alternativa que les resulte atractiva para salirse de la inversión sin para eso tener que vender toda la compañía.

Para ser exitosos, los emprendedores también necesitan contar con un marco legal y cultural que no los castigue. Un primer fracaso empresarial no debería ser causa de condena, por el contrario, tendría que ser visto, por los funcionarios y la sociedad en su conjunto, como parte de un proceso de prueba y error. Una medida concreta que podría ayudar a que esto sucede consistiría en imitar el caso de Chile, país que aprobó una ley de quiebras que simplificó enormemente este proceso, permitiéndoles a sus emprendedores comenzar nuevos proyectos

sin verse demorados por un fracaso anterior.

Una reforma tributaria para terminar con la marginalidad

La situación social en la que se encuentra la Argentina es de suma gravedad. Según la encuesta anual que realiza el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 46 % de los habitantes de núcleos urbanos dice no tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, mientras que un 12 % no tiene capacidad de ahorro alguno (19).

La realidad que enfrentan los más jóvenes es particularmente preocupante. Otro informe del Observatorio sostiene que en el 2015 un 27 % de los menores de 18 años tenía las necesidades básicas insatisfechas (20). Por otra parte, mientras que en 1994 el 11 % de los jóvenes encuestados no estudiaba ni trabajaba, en el 2013 el 18 % no lo hacía (21).

Los problemas relacionados con el acceso a los servicios públicos también son graves. El Censo Nacional del 2010 muestra, por ejemplo, que el 12 % de los argentinos no habita en una vivienda digna, que el 16 % de los hogares no tiene acceso a red de agua y que un 46 % no lo tiene a la red cloacal. ¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora para enfrentar esta problemática? En la última década la lucha contra la marginación se dio principalmente a través de la provisión de subsidios sociales y del incremento en el número de empleados públicos –que mayoritariamente tuvo lugar en el ámbito provincial y municipal. De esta manera, el porcentaje de los hogares urbanos que recibe algún tipo de plan social se incrementó de un 23,7 % en el 2010 a un 32,2 % en el 2016 (22). Por otro lado, aproximadamente el 46 % del incremento que tuvo lugar en el gasto provincial y municipal a partir del 2000 se debió al mayor empleo público. El 14,8 % de los trabajadores argentinos son actualmente empleados públicos, una cifra que supera la de todos los países latinoamericanos y un promedio regional que no supera el 11 % (23).

Los resultados de esta estrategia no han sido positivos. En los últimos seis años el núcleo duro de pobreza en la Argentina no disminuyó. El relevamiento del Observatorio Social, que, a falta de estadísticas confiables del INDEC, se ha vuelto la fuente más confiable, muestra que en el 2016 el 32,9 % de los habitantes de los conglomerados urbanos era pobre. Esto significa que a partir del 2007 esta cifra ha aumentado en aproximadamente 5 puntos porcentuales. Asimismo, el desempleo y la precariedad laboral afecta actualmente al 50% de los trabajadores (24).

Ante este fracaso, debemos replantearnos qué podemos hacer para revertir la marginación social que enfrenta la Argentina. Un actor clave en este proceso, y que hasta ahora ha sido ignorado, es el sector privado. Efectivamente, las empresas son los actores mejor capacitados para generar la riqueza y los empleos de calidad que los sectores más humildes de la población necesitan para integrarse al núcleo social, económico y cultural del país.

Resulta sin embargo importante señalar que con "sector privado" no nos referimos solamente a las empresas tradicionales. Los emprendedores más marginales, aquellos que viven en villas de emergencia y no tienen acceso al sector formal, también deberían ser protagonistas de este cambio. El Estado tendría entonces que eliminar las barreras que les impiden a estos empresarios formalizarse y crecer. De no ocurrir esto, el vacío que genera la falta de nuevos empleos privados seguirá siendo ocupada por las redes clientelares y el narcotráfico, que muchas veces son vistos como opciones atractivas por el creciente número de jóvenes que no trabajan ni estudian.

Quizás la mayor dificultad que enfrentan los empresarios argentinos para ganar competitividad y generar nuevos puestos de trabajo sea la existencia de un sistema tributario altamente disfuncional.

Además de proveer de recursos al Estado, los sistemas impositivos brindan incentivos a los distintos actores económicos y, de esta manera, fomentan cierto tipo de comportamiento. Por ejemplo, la implementación de un gravamen puede estimular el consumo o la inversión, un cambio en el impuesto al

trabajo puede estimular o desincentivar la contratación de personal y los impuestos a las exportaciones desincentivarán el comercio internacional. Es por este motivo que el establecimiento de un sistema impositivo debe ser el resultado de una visión a largo plazo sobre el país que queremos tener.

Lamentablemente, esto no es lo que ocurre en la Argentina, ya que nuestro sistema impositivo es principalmente el producto de la acumulación de impuestos que alguna vez fueron creados transitoriamente, pero que luego nunca fueron eliminados. Esto explica, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las economías del mundo, la elevada participación que tienen en nuestro país los impuestos que alteran fuertemente el comportamiento de los actores económicos y, al hacerlo, reducen nuestra productividad.

Los dos ejemplos más claros de esto quizás sean las retenciones a las exportaciones y los impuestos a los créditos y débitos bancarios. Este último tipo de impuesto es particularmente distorsivo porque desalienta el uso de dinero bancario, que es una de las mejores maneras que tienen las sociedades para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Por otra parte, al dificultar el ahorro también perjudica el desarrollo de los mercados de crédito y de capitales. Por otro lado, las retenciones también han perjudicado el crecimiento de la Argentina, porque, al gravar la exportación de productos como la soja desalientan la producción en las tierras marginales.

A diferencia de lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, a este tributo lo pagan todos los productores, incluyendo aquellos que, debido a los elevados costos de transporte y menores rendimientos que enfrentan, tienen pequeños márgenes de ganancia o inclusive pérdidas. Ante la alternativa de expandir su producción a zonas más marginales, muchos productores han decidido por lo tanto no hacerlo. En suma, la cosecha argentina hoy es menor de lo que habría sido si los mismos recursos fiscales se hubiesen obtenido mediante otro tipo de tributos, como

pueden ser aquellos que gravan la tierra o la ganancia.

A la mala estructura del sistema impositivo argentino debemos sumarle el aumento de la carga tributaria. Una comparación con la carga tributaria legal que enfrentan otras naciones nos servirá para comprender la excepcionalidad del caso argentino. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en el 2013 América Latina tenía una presión tributaria promedio del 31,2 % y los países que conforman la OCDE del 34,1 %, la de la Argentina era del 37,3 % (25).

Un caso particularmente preocupante, debido a la creciente movilidad del capital que se observa en el mundo, es la tasa de ganancia que pagan nuestras empresas. Mientras que en la Argentina la tasa de ganancias se mantiene en el 35 %, otras naciones han reducido este impuesto para atraer nuevas inversiones. En Ecuador la tasa máxima de ganancia bajó del 25 % al 22 %, en Uruguay del 30 % al 25 %, en Suecia del 28 % al 22 %, en España del 35 % al 30 %, en Australia del 31 % al 27 %, en Rusia del 24 % al 20 % y en Canadá del 36 % al 26 %. La tasa promedio en América Latina es del 27 %, en Europa del 22 % y a nivel global del 24 %. Inclusive en los pocos países que aún mantienen tasas cercanas al 35 % se están produciendo cambios (26). En Estados Unidos ya existe un amplio consenso respecto a la necesidad de disminuir una alícuota que le quita competitividad a sus empresas y que ha llevado a que varias de ellas hayan trasladado sus casas matrices al exterior. Japón, por otro lado, oficializó una baja en su tasa de ganancia corporativa al 31 %.

La situación argentina es más grave aún si consideramos que debido a la elevada inflación que sufrimos, el impuesto a las ganancias suele cobrarse sobre beneficios inexistentes. Este hecho hace que la tasa real supere ampliamente el 35 % (27).

Pero si el modelo actual no sirve, ¿a qué tipo de sistema impositivo deberíamos aspirar a tener? Un buen sistema impositivo debe ser simple y estar compuesto por la menor cantidad de impuestos distorsivos que sea posible. Este es el tipo de sistema

que adoptaron los países más desarrollados, en donde tienden a prevalecer el impuesto a la ganancia y el impuesto al valor agregado. Este principio también explica por qué en los últimos años Uruguay redujo la cantidad de impuestos nacionales de 26 a solo 11 (28). Debemos entonces suprimir impuestos como los que gravan al crédito y débito bancario y a las exportaciones. Un proceso similar debe ocurrir a nivel subnacional, donde el impuesto a los ingresos brutos provinciales y las tasas de seguridad e higiene municipales ganaron un peso desmedido respecto a tributos menos distorsivos, como lo son aquellos que gravan la propiedad y los automóviles.

La otra meta debe ser reducir la carga impositiva que enfrentan nuestras empresas. ¿Qué bajas debemos priorizar? Dada la situación económica y social que hemos descrito, en una primera etapa habrá que implementar un sistema impositivo que incentive las inversiones en general, pero particularmente aquellas que promueven la innovación y la creación de fuentes de trabajo formales. Para avanzar en esta dirección, proponemos dos medidas a corto plazo y una para más adelante.

Siguiendo el ejemplo de Ecuador, la Argentina tendría que recortar a la mitad la alícuota de ganancia para aquellas utilidades que sean reinvertidas. También es aconsejable, tanto en el caso de las sociedades como en el de los individuos, incorporar actualizaciones automáticas y periódicas por inflación. Asimismo, el Estado debería hacerse cargo de parte de las contribuciones patronales que hoy en día aportan las empresas. Esto abarataría el costo que implica contratar y mantener mano de obra. En este sentido, un caso exitoso ha sido el de Colombia, país que recientemente ha logrado incrementar la formalidad laboral luego de disminuir las contribuciones laborales. Un paso inicial en esta dirección consistiría en reducir las tasas que se pagan por emplear a trabajadores que tengan menos de 25 años, que en su conjunto conforman un sector de la sociedad con un alto grado de informalidad. Pensando en el largo plazo, también sería recomendable

reducir la alícuota de ganancias y bajar aún más las retenciones a la soja. A mediano plazo, se podría pensar en la posibilidad de reducir la alícuota de ganancias, lo cual además de promover el dinamismo de todo el sector privado facilitaría el paso a la formalidad de las empresas informales.

Pero cualquier programa que busque simplificar y reducir la carga impositiva en la Argentina debe tener como contrapartida una serie de políticas que limiten el crecimiento del gasto público y combata al mismo tiempo la evasión fiscal. Una estrategia realista en este sentido consistiría en congelar el gasto fiscal, en términos reales, por una cierta cantidad de años. Con el paso del tiempo, esta medida hará que el gasto disminuya respecto al tamaño de la economía, lo cual nos colocará en una situación similar a la media regional e internacional. Este es el camino que tomaron, con éxito, países como Suiza e Irlanda.

También habrá que cambiar la distribución del gasto, transfiriendo recursos que hoy son destinados a la provisión de subsidios al sector privado (principal factor que explica el crecimiento del Estado en el período que va del 2000 al 2012) a la realización de inversiones en aquellas responsabilidades básicas del Estado que en los últimos años fueron descuidadas.

Piketty y la Argentina

Antes de culminar con nuestra discusión sobre el sistema tributario argentino, debemos analizar en qué medida la situación de nuestro país es comparable con la de los países desarrollados. En este sentido, y dada la relevancia que ha alcanzado recientemente en los círculos políticos e intelectuales de Occidente, no podemos dejar de mencionar el libro *El capital en el siglo XXI*, del economista francés Thomas Piketty (29).

Luego de estudiar la relación entre capital y distribución de la riqueza en el mundo desarrollado desde el siglo XVIII hasta la actualidad, Piketty concluye que, cuando la tasa de retorno del capital es mayor que la de crecimiento económico, la riqueza tiende a concentrarse en las manos de unos pocos

capitalistas, generando así mayor desigualdad. Piketty sostiene que el aumento de la desigualdad es una tendencia natural del capitalismo que solo pudo ser revertida durante un breve período histórico, de 1930 a 1975. Esta anomalía se debió principalmente a dos factores: la destrucción de las grandes fortunas —debido a las guerras mundiales y a la Gran Depresión— y las altas tasas de crecimiento económico que experimentaron las economías desarrolladas durante ese lapso de tiempo. Pero en las últimas décadas se habría retomado la trayectoria natural del capitalismo, lo cual explica por qué los niveles de desigualdad comenzaron a crecer una vez más.

Piketty sostiene que para revertir este proceso habrá que crear un sistema impositivo altamente progresivo que, para evitar que los ricos muevan sus capitales a aquellos destinos que cobran menos impuestos, abarque a todas las naciones. Esta mayor carga impositiva ayudaría a reducir niveles de desigualdad, que, al ser tan altos, ponen en peligro el mismo orden político y social de las naciones. Por otro lado, Piketty duda de que el crecimiento económico en los países desarrollados pueda ser lo suficientemente alto para permitir que los ingresos de la sociedad se incrementen por arriba de la tasa de retorno del capital.

Actualmente no existe consenso académico respecto a la validez del análisis de Piketty, y menos aún sobre las reformas que propone. Algunas de las críticas que se han hecho se centran en la falta de atención que el autor le habría prestado a otros factores explicativos de la desigualdad, como son la creciente automatización de las tareas rutinarias y la presencia de instituciones política y económicamente inclusivas (30).

Otros autores sostienen que el crecimiento de la inequidad que se observa en el mundo desarrollado, en especial a partir del 2008, es el resultado de la política monetaria expansiva que han llevado adelante los bancos centrales. Al reducir la tasa de interés a cero para estimular el crecimiento económico, estas instituciones habrían inflado artificialmente el precio del tipo de acti-

vos que suelen tener los individuos de mayores recursos, principalmente acciones y bonos (31). Quizás más importante sea el efecto que la creciente automatización ha tenido en la producción de manufacturas y en los servicios. Millones de puestos de trabajos están siendo reemplazados tanto por robots como por la creciente digitalización de la economía (32). A futuro, pensemos tan sólo en el efecto disruptivo que tendrá sobre el mercado laboral la aparición de autos y camiones autónomos.

Se ha señalado, asimismo, que si bien la desigualdad puede ser hoy mayor que hace un par de décadas atrás, en la actualidad los miembros de las élites se renuevan constantemente. Por ejemplo, los cambios en la lista de los 400 estadounidenses más ricos muestran un incremento notable en el número de emprendedores y asalariados en desmedro de los herederos (33). Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede con el resto de la población estadounidense, el número de horas trabajadas por los individuos de mayor ingreso se ha incrementado, lo cual parecería indicar la existencia de una elite más meritocrática que la existió antes de los 80 (34).

El éxito económico de los ricos estadounidenses sería entonces el resultado de su esfuerzo personal, una justa recompensa por innovaciones — la invención de las computadoras personales, los teléfonos inteligentes, etcétera— que favorecen a toda la sociedad. Pensemos tan solo en los beneficios económicos y sociales que trajo consigo la invención y difusión del sistema operativo y de *software* Windows. Si bien este le permitió a Bill Gates acumular una enorme fortuna, dicho beneficio ha sido insignificante si lo comparamos con su aporte.

Según esta visión, la clave para impedir un incremento en la desigualdad no pasaría entonces por elevar la carga impositiva sino por proveer una educación de calidad a los ciudadanos. Una mayor oferta de trabajadores capacitados disminuiría su ingreso promedio, mientras que un menor número de los no calificados aumentaría los ingresos de este grupo. Por el contrario, aumentar los impuestos desincentivaría el proceso de innovación capitalista que se necesita para crear trabajos de calidad.

Pero más allá de las críticas que se le han

hecho al trabajo de Piketty en el mundo desarrollado, cabe preguntarse en qué medida su perspectiva nos sirve para analizar la economía argentina. Debemos recordar que *El capital en el siglo XXI* se limita a estudiar la situación de los países desarrollados y no la de los emergentes, que poseen tasas de crecimiento potencialmente superiores a los primeros y que, por lo tanto podrían, al menos en principio, aspirar a disminuir los niveles de desigualdad a través de una mejora en los ingresos de los habitantes más pobres.

Por otra parte, la Argentina es un país que enfrenta un problema más grave que la desigualdad de ingresos: la creciente exclusión económica, social y cultural que sufre una parte importante de su población. Si bien existen numerosas razones que explican este fenómeno (el debilitamiento de la familia como soporte económico y emocional de los más jóvenes, el menor peso de la industria como generadora de empleos en las regiones metropolitanas, la instalación del narcotráfico, etcétera), la falta de dinamismo que se observa en el sector privado quizás sea la principal causa (35). La solución propuesta por Piketty (aumento de impuestos) podría entonces servir para disminuir la desigualdad, pero al mismo tiempo agravaría la marginación social debido a que la carga impositiva en la Argentina ya es de por sí asfixiante (36).

Una comparación entre lo que sucedió en los últimos años en Francia y en Suecia puede servirnos para entender cuáles serían las consecuencias que el incrementar o reducir la carga impositiva producen en las economías modernas. Al asumir como Presidente de Francia, François Hollande anunció que incrementaría al 75 % la tasa del impuesto a las ganancias que pagaba el sector de mayores recursos. Si bien este aumento tuvo la intención de reducir los niveles de desigualdad y brindar mayores recursos al Estado — cabe señalar que Piketty asesoró a Hollande durante su campaña electoral—, los resultados terminaron siendo otros.

En primer lugar, el crecimiento económico de Francia se estancó y la recaudación impositiva

disminuyó por el menor nivel de actividad. Más grave aún fue el aumento en el número de empresarios franceses que decidieron dejar el país en busca de condiciones más favorables para llevar adelante sus emprendimientos. Inclusive un número importante de personalidades de otros ámbitos, como sucedió con el actor Gerard Depardieu, abandonaron Francia. Como consecuencia de la falta de resultados y del rechazo social que despertaron sus políticas, Hollande no sólo se convirtió en el presidente francés con peor imagen de la V República sino que también se vio obligado a revertir parte de su reforma impositiva, bajando impuestos y reduciendo el gasto fiscal. Hoy el Presidente Emmanuel Macron ha encarado una serie de políticas que ahondar aún más este cambio.

En el otro extremo se encuentra el caso de Suecia, país que en los últimos años se embarcó en un proceso de reforma contrario al francés. El gobierno del primer ministro Fredrick Reinfeldt eliminó numerosos tributos, incluyendo el que gravaba los bienes personales, y redujo asimismo las alícuotas del impuesto a las ganancias para individuos y sociedades. En parte como consecuencia de este plan, entre el 2006 y el 2014 la economía sueca creció un 13 % y los ingresos de sus ciudadanos aumentaron un 20 %. Todo esto fue acompañado por un superávit fiscal y una deuda pública menor al 40 % del PBI.

En definitiva, en un mundo globalizado donde el capital migra hacia los lugares en donde puede obtener mayores tasas de retorno, un país que quiera innovar y crear trabajos de calidad debe seguir el camino sueco.

Un cambio profundo

Si bien las propuestas que hemos hecho hasta aquí claramente favorecen los intereses del empresariado, para que la Argentina cuente con un sector privado capaz de crear empleos y de liderar junto al Estado nuestra integración económica con el mundo también necesitamos que parte del empresariado argentino modifique su comportamiento. Entre estos, de hecho, muchas veces se observan conductas de tipo rentísticas. Algunos han promovi-

do un ambiente altamente regulado para impedir la entrada de nuevos competidores, otros han formado monopolios que terminaron encareciendo los productos y los servicios a los que acceden los consumidores argentinos y muchos más han impulsado políticas proteccionistas para evitar la competencia externa.

La Argentina necesita empresarios que defiendan un capitalismo moderno y que quieran formar parte activa de una clase dirigente que tenga como objetivo proteger los intereses del país. Muchos de ellos ya lo hacen, pero no han sido capaces de coordinar su accionar para lograr que estas conductas se universalicen.

Más allá de los beneficios que un cambio como este tendría para el país en general, los propios empresarios son quienes más se favorecerían debido a su nuevo accionar. Esto se debe a que si la Argentina logra desarrollarse exitosamente, no solo el valor de sus firmas crecerá — hoy está muy por debajo del de nuestros vecinos—, sino que la imagen que la sociedad tiene actualmente de ellos y del capitalismo en general mejorará enormemente (37). Por lo contrario, pensar que una mera campaña de comunicación puede revertir las sospechas que muchos argentinos tienen sobre sus acciones sería un error, ya que las redes sociales dificultan la instalación de una imagen que no refleja la realidad (los millones de argentinos que participan de ellas harían público cualquier acto de hipocresía).

Para lograr que este cambio tenga lugar también será necesario que el empresariado comience a organizarse de manera más eficiente, algo que en el último tiempo no ha sido posible. Esto se ve reflejado en la gran cantidad de asociaciones empresarias que existen, ninguna de las cuales encolumna detrás de sí al sector privado. Este vacío dirigencial es una de las razones que explican por qué el empresariado no ha podido presentar alternativas reales a una serie de fenómenos —como la suba de la presión impositiva, el deterioro educativo, etcétera— que no sólo terminaron perjudicando sus intereses, sino también los de la sociedad en general. Un primer paso en

este sentido consistiría en fortalecer a la Asociación Empresarial Argentina (AEA) como la principal entidad empresarial del país. El mayor activo que tiene esta organización es que busca agrupar a los máximos representantes de las empresas argentinas, que, como hemos dicho, son las que tienen sus intereses más alineados con los del país.

Pero para que la AEA tenga mayor protagonismo antes ganar legitimidad. Tendrá entonces que incorporar nuevos referentes empresariales —no solo de las empresas de mayor tamaño, sino también de las pymes y las multinacionales—, y contar con un presupuesto que le permita relacionarse con otros sectores de la sociedad y estudiar aquellos temas que hacen a la competitividad del país (38). Una mayor densidad institucional también le permitiría a esta entidad formar parte activa del Consejo de Competitividad que hemos propuesto anteriormente.

También es importante que el empresario argentino comience a valorar su rol como generador de riqueza. La falta de comprensión sobre la importante función que cumplen las empresas en las economías modernas ha llevado a que muchos empresarios se sientan inseguros sobre su rol social y, por lo tanto, se nieguen a participar del debate público. En este sentido, un aporte concreto que pueden realizar los empresarios es promover las reformas educativas. Sin ir más lejos, esto es lo que ocurrió en México y en Brasil, países donde las asociaciones empresariales financian estudios y estimulan la discusión acerca de los cambios que deberían ser implementados en el sistema educativo.

Finalmente, los empresarios argentinos tienen que replantearse el tipo de relación que mantienen con el sindicalismo. El grado de conflictividad que existe entre estos dos sectores es demasiado grande. Se necesitan, por lo tanto, acuerdos que favorezcan los intereses de ambas partes y brinden mayor estabilidad a la relación. La creación de institutos de formación laboral financiados tanto por las empresas como por los sindicatos y el acordar fórmulas que ligen a los salarios con los incrementos en la productividad son dos medidas que podrían ayudar a revertir esta situación. Un caso para estudiar es el de Alemania, país en donde empresarios y

sindicatos trabajan de manera conjunta para mejorar la eficiencia de la economía. Ambas partes entendieron que los salarios de los trabajadores solo pueden aumentar de manera sustentable cuando la productividad de su trabajo es mayor.

El potencial de nuestras empresas

Si bien hasta ahora las empresas argentinas no han sido demasiado exitosas en su inserción internacional, existe un número de firmas que, una vez eliminadas las barreras que impiden su crecimiento, deberían poder convertirse en líderes regionales.

No debemos olvidarnos que las firmas argentinas fueron una de las primeras no pertenecientes al mundo desarrollado en expandirse internacionalmente. De esta manera, Bunge y Born, Alpargatas, Quilmes y Siam Di Tella aprovecharon el liderazgo tecnológico que tuvo en su momento nuestro país para instalar fábricas en el resto de Sudamérica. Eventualmente, la inestabilidad económica e institucional que caracterizó a la Argentina moderna puso un freno a este primer impulso, ya que si bien empresas como Bagó, Impsa, Arcor y Techint pudieron pegar el salto internacional, muchas otras terminaron vendiéndose a extranjeros, trasladaron sus casas matrices al exterior —como pasó con Bunge—, o directamente quebraron —Siam es un ejemplo emblemático (39).

Quizás el caso más exitoso sea el del grupo Techint, que, a través de la producción de tubos sin costuras y aceros planos, logró alcanzar una escala mundial. Parte del éxito de esta organización se debe a la calidad del *management* argentino, que fue utilizado para liderar las operaciones en todos aquellos países en donde la empresa compró o instaló fábricas —México, Venezuela, Japón, Canadá, Rumania y los Estados Unidos, entre otros. Las empresas del grupo Techint también se caracterizan por su alto grado de innovación, como lo demuestran sus centros de investigación, el principal de los cuales se encuentra en el país.

Otra empresa exitosa es Arcor, la mayor productora de caramelos del mundo. Gracias a la integración vertical de sus insumos y a su expansión en los mercados internacionales, esta firma cordobesa se transformó en un modelo del tipo de multinacionales que la Argentina puede aspirar a tener en un sector de la economía como el de los alimentos, en donde posee claras ventajas comparativas.

También es destacable el rol que juegan empresas alimenticias como San Miguel, que se ha expandido a Uruguay y a Sudáfrica y es hoy una de las principales exportadoras de limones en el mundo, y Don Mario, responsable a través de sus semillas de una parte importante de la producción sojera de Argentina y Brasil. Por otra parte, la empresa Peñaflor es una de las cinco mayores bodegas de vinos a nivel mundial en términos producción y actualmente exporta sus productos a más de noventa mercados. Compañías como Molinos y Ledesma tienen asimismo el potencial para seguir los pasos de las brasileñas JBS y Brasil Foods, que recientemente lograron posicionarse como líderes mundiales en el sector cárnico y alcanzaron una escala que les permite estar en la frontera tecnológica (40).

Otro caso para estudiar es el de Havanna, empresa que sumó la provisión de servicios a la producción de alimentos. De esta manera, sus cafeterías no solamente le sirven para distribuir sus productos, sino que la posicionaron como un jugador regional en un sector que, como lo demuestran las valuaciones de empresas como Starbucks, es altamente valorado en los mercados internacionales. El modelo de expansión internacional que eligió Havanna, que ya cuenta con más de 80 locales en el exterior, fue el de franquicias. Se calcula que más de 160 empresas argentinas han utilizado este mecanismo para expandirse a aproximadamente 46 países con sus 1592 locales (41). Muchas de estas firmas están relacionadas con la moda —Etiqueta Negra, Todomoda, Rapsodia, Cheeky, Kosiuko, Kevingston, La Martina, etcétera—, lo cual muestra el potencial que nuestra industria textil tiene en el sector de mayor calidad, que es, gracias al diseño y al marketing, el que incorpora mayor valor agregado y el que ofrece mejores salarios.

En el rubro servicios se destacan las empresas del conocimiento. Globant es la firma de *software* líder en América Latina, y ya cuenta con más de 5000 especialistas que trabajan principalmente para clientes del exterior, entre los cuales se destacan Google y los parques de diversiones de Disney. En el sector turístico, Despegando.com es la cuarta agencia de viajes a nivel mundial. Con una facturación que supera los 500 millones de dólares, Mercado Libre no sólo es la plataforma latinoamericana de comercio y subastas por Internet. La plataforma de venta y compras por Internet OLX tiene presencia en más de 40 países y lidera un mercado tan importante como es el de India. Es importante destacar por último que tanto Mercado Libre como Globant cotizan en el índice Nasdaq de Nueva York y su valor de mercado supera los mil millones de dólares. La primera incluso forma parte —al tomar el lugar de Yahoo— del índice del sector tecnológico Nasdaq 100, compuesto por las 100 principales empresas del sector.

Un caso particularmente interesante, debido a su manejo de tecnologías estratégicas, es el del INVAP. Esta compañía rionegrina no sólo les ha vendido reactores nucleares a países como Australia y Egipto, sino también ha avanzado en la producción de satélites, turbinas eólicas y radares. El conocimiento que tiene Impsat sobre energía hidroeléctrica también la coloca en la frontera tecnológica a nivel mundial.

La necesidad de recuperar la producción perdida luego de años de abandono, y a la posibilidad de explotar exitosamente tanto Vaca Muerta como las energías renovables, genera nuevas oportunidades en el sector energético. Empresas como Pluspetrol, Compañía General de Combustibles y Panamerican seguramente ganarán escala en los próximos años, lo cual seguramente las llevará a expandirse en el exterior. De hecho, Pluspetrol ya tiene importantes operaciones en Perú y en otras naciones, mientras que Panamerican, además de poseer en Cerro Dragón un yacimiento que es modelo a nivel mundial, opera en Bolivia y en México.

Finalmente, no debemos olvidarnos de la generación de nuevas empresas. Estudios muestran que la Argentina es la sociedad latinoamericana que tiene los valores más asociados al emprendedurismo, entre los cuales podemos mencionar un alto grado de independencia e imaginación (42). Su dinamismo se ve reflejado en el hecho de que Buenos Aires es la ciudad latinoamericana que más patentes per cápita tiene (43). Como lo demuestra el éxito que han tenido en el exterior proyectos como Mercado Libre, Despegar, Globant y OLX, el emprendedor argentino se distingue del emprendedor promedio de la región por su voluntad y su capacidad para integrarse a los mercados internacionales.

Como lo demuestran estas empresas, la Argentina cuenta con los recursos necesarios para competir en el exterior. Si generamos las condiciones adecuadas, el empresario argentino podrá liderar la inserción económica de la Argentina en el mundo.

Referencias

- (1) Existe un argumento económico a favor de tener empresas argentinas que sostiene que estas pueden ser más eficientes que las multinacionales extranjeras porque cuentan con mayor información sobre el mercado local y tienen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos.
- (2) Andrés López, *Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino*, Buenos Aires, CEPAL, 2006.
- (3) Cuadros estadísticos de las grandes empresas, www.indec.gov.ar.
- (4) Forbes, Global 2000 Leading Companies 2015, <http://www.forbes.com/global2000>.
- (5) Ranking 2014 Multilatinas, 2014, América Economía, <http://rankings.americaeconomia.com/multilatinas-2014/ranking-2/>.
- (6) Friedrich Hayek, *Individualism and economic order*, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
- (7) Robert Michels, *Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.
- (8) Los empresarios también pueden jugar un importante rol en el plano político, ya que, al representar parte de la sociedad civil, ayudan a evitar el surgimiento de los regímenes totalitarios. Una economía capitalista genera un sinnúmero de actores que limitan el tipo de poder político, que, para ser realmente todopoderoso, requiere del control de los medios de producción.
- (9) Joseph Schumpeter, *The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle*, Cambridge, Harvard University Press, 1934.
- (10) Anne Krueger, "Why crony capitalism is bad for economic growth", en S. Haber ed., *Crony capitalism and economic growth in Latin America: theory and evidence*, Stanford, Hoover Institution Press, 2002, y Anne Krueger, "The political economy of the rent-seeking society", en *American Economic Review*, vol. 64, no. 3 1974.
- (11) López, *Empresarios, instituciones y desarrollo económico*, pp. 269-270.
- (12) Jorge Oviedo, "El Estado creció 60 % en 12 años y representa el 42,5 % de la economía", en *La Nación*, 22 de octubre del 2013.
- (13) "Una Argentina competitiva, productiva y federal, reforma tributaria para la competitividad y el crecimiento", IERAL, 2011.
- (14) A esta cifra hay que sumarle un 3,3 % de impuestos municipales. Daniel Artana y otros, "El sistema tributario argentino: análisis y evaluación de propuestas para reformarlo", FIEL, 2015.
- (15) Banco Mundial, "Doing business 2014: understanding regulations for small and medium-size enterprises", Washington DC, Banco Mundial, 2014.
- (16) Silvia Pisani, "EE. UU. apunta a Cristina por La Sala", en *La Nación*, 6 de marzo del 2015.
- (17) Hernando De Soto, *El otro Sendero*, Lima, Instituto Libertad y Democracia, 1990.
- (18) Banco Mundial, "Doing business 2015", 2015.
- (19) Barómetro de la Deuda Social Argentina, *Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina Urbana 2010-2016*, Buenos Aires, Educa, 2017.
- (20) Barómetro de la Deuda Social Argentina, *Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 2010-2016*, Buenos Aires, Educa, 2016.
- (21) Barómetro de la Deuda Social Argentina, *Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina Urbana*, Buenos Aires, Educa, 2014.
- (22) Barómetro de la Deuda Social Argentina, *Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina*, 2017.
- (23) Banco Interamericano de Desarrollo y Organización para la Cooperación y el Desarrollo, "Panorama de

- las administraciones públicas, América Latina y el Caribe", Ginebra, OCDE, 2014.
- (24) Barómetro de la Deuda Social Argentina, *Desarrollo Humano e Integración Social en la Argentina*, 2017.
- (25) Organización para la Cooperación y el Desarrollo y otros, "Revenue statistics in Latin America and the Caribbean: 1990-2013", Paris, OCDE, 2015.
- (26) KPMG, Corporate Tax Rate Table, <http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx>.
- (27) Algo similar ocurre con el impuesto a la ganancias que pagan los empleados argentinos, ya que, debido a la falta de indexación para determinar quiénes deben pagarlo —y, de hacerlo, en qué categoría estarían incluidos—, se generan menos incentivos para trabajar. Es de esperar, entonces, que la productividad de nuestros trabajadores disminuya con el paso del tiempo.
- (28) "Uruguay descarta un ajuste fiscal y promete bajar impuestos", en Infobae.com, 27 de mayo del 2014. Disponible en <http://www.infobae.com/2014/05/27/1567885-uruguay-descarta-un-ajuste-fiscal-y-promete-bajar-impuestos>.
- (29) Thomas Piketty, *Capital in the twenty-first century*, Cambridge, Harvard University Press, 2014.
- (30) Erik Brynjofsson y Andrew McAfee, *The second machine age, work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*, Nueva York, Norton, 2014 y Daron Acemoglu y Ymames Robinson, "The rise and fall of general laws of capitalism", 2014.
- (31) Ver, por ejemplo, lo que sucedió en Japón, Ayako Saikia y Jon Frost, *How does unconventional monetary policy affect inequality? Evidence from Japan*, Amsterdam, De Nederlandsche Bank, documento de trabajo no. 423, 2014.
- (32) Para el caso de los Estados Unidos, ver Acemoglu, Daron y Restrepo, Pscual, *Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets*, NBER Working Paper Series, no 23285.
- (33) Steven Neil Kaplan y Joshua Rauh, "Family, education, and sources of wealth among the richest americans, 1982-2012", en *American economic review papers & proceedings*, 2013. Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman también encuentran evidencia que mostraría un incremento en el número de emprendedores que conforman las mayores fortunas. Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman, "[Wealth inequality in the United States since 1913: evidence from capitalized income tax data](#)", Washington D.C., National Bureau of Economics Research, documento de trabajo 20625, 2014.
- (34) Mark Aguiar y Erik Hurst, "Measuring trends in leisure: the allocation of time over five decades", en *Quarterly Journal of Economics*, vol. 122, no. 3, 2007.
- (35) Además de poner fin a la pesada carga impositiva que enfrenta el sector formal de la economía argentina, otra medida que ayudaría a impulsar el crecimiento de los ingresos de nuestros ciudadanos consistiría en fomentar la libre competencia en el mercado nacional. Esto permitiría reducir el costo de los servicios y los productos, lo que aumentaría los salarios reales y, en consecuencia, promovería el consumo.
- (36) También debemos diferenciar la situación de la Argentina de la de otros países de la región. Nuestros niveles de desigualdad no solo son menores que los de Brasil, Chile, Colombia y México, sino que en los últimos años han venido disminuyendo.
- (37) Las firmas chilenas o brasileras duplican el valor de las argentinas, en términos del múltiplo que se paga por sus ganancias.
- (38) Cuanto mayor sea el grado de representatividad, menor serán las probabilidades de que una entidad pueda ser cooptada por un grupo de interés. Ver Mancur Olson, *The logic of collective action*, Cambridge, Harvard University Press, 1965.
- (39) Bernardo Kosacoff y Adrian Ramos, "Tres fases de internacionalización de las empresas industriales argentinas: una historia de pioneros, incursiones y fragilidad", *Universia Business Review*, primer trimestre, 2010.
- (40) En el caso brasiler, se siguieron dos estrategias. Mientras que JBS se expandió principalmente a través de adquisiciones en el exterior y se convirtió en el mayor productor de proteínas del mundo, BRF buscó incrementar sus exportaciones.
- (41) Alfredo Sainz, "Cada vez son más las marcas de ropa argentinas que abren en el exterior", en *La Nación*, 3 de mayo del 2015.
- (42) José Anchorena y Lucas Ronconi, "Entrepreneurship, entrepreneurial values, and public policy in Argentina", Washington D.C. Inter-American Development Bank, documento de trabajo 316, 2012.
- (43) McKinsey Global Institute, *Building globally competitive cities: the key to Latin American growth*, Nueva York, McKinsey, 2011.

Para citar este artículo:

De Santibañes, Francisco. (2017), "El rol del empresario argentino en el mundo", [disponible en línea desde julio 2017], Grupo de Trabajo sobre la Inserción de la Argentina en el mundo. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Dirección URL: http://www.cari.org.ar/pdf/de_santiban.es.pdf